



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

EXPTE: 4626/2024

“LUQUE EMILIO SALVADOR c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

EMILIO SALVADOR LUQUE impugna la resolución administrativa N° 26 del 07/11/2023 que al confirmar una anterior reclama deuda y multa en concepto de aportes y contribuciones de seguridad social durante el periodo 09/2019 a 12/2021 con relación al trabajador Luis Adrián Mazziotti.

El interesado dio cumplimiento a la exigencia prevista por el art. 15 de la ley 18.820 por lo que corresponde proceder a la apertura de la presente instancia judicial

En su memorial de agravios, el presentante expresa que se encuentra atravesando un concurso preventivo en trámite por ante el juzgado civil y comercial común de I nominación del San Miguel de Tucumán, que es falso que no se hayan registrado las declaraciones de aportes y contribuciones de la seguridad social con respecto al Sr. Luis Adrián Mazziotti. Imputa asimismo arbitrariedad a la resolución dictada pues entiende que se omitió notificar y producir la totalidad de las pruebas ofrecidas lo que habría arrojado luz sobre la cuestión en debate. Tampoco se le notificó la fecha de la audiencia testimonial cumplida, hechos todos estos que determinan que la decisión cuestionada se encuentra en su opinión divorciada de la realidad lesionando sus derechos constitucionales (art.18 CN).

La parte demandada expresa que el recurso presentado no constituye una verdadera expresión de agravios en los términos del 265 del CPCCN, pues lo que hace el recurrente es simplemente manifestar su disconformidad al entender que la administración dictó resolución sin haber notificado y menos aún producido la prueba ofrecida.

Niega el organismo que la resolución dictada sea carente de motivación pues el escrito impugnatorio demuestra que tuvo cabal conocimiento de las actuaciones administrativas. Refiere que en ningún momento se violentó el debido proceso adjetivo, pues nunca se colocó a la parte actora en estado de indefensión, que el proceso ha sido regular y se ha respetado el derecho de defensa (art. 18 CN). Explica que el origen de estos actuados está en la verificación realizada por la fiscalización con motivo de la denuncia previsional realizada por Luis Adrián Mazziotti quien trabajó para Luque como gerente de administración denunciando remuneraciones declaradas en menos a las realmente percibidas durante el periodo 09/2019 a



12/2021. Refiere que con fecha 16/05/23 fue clausurada la etapa probatoria, circunstancia que fue notificada al interesado el 22/05/23, quedando constancia que la prueba ofrecida no se produjo por inacción procesal, lo que llevó a la Administración a considerar decaído el derecho dejado de usar.

La lectura de la causa revela que el Sr. Mazziotti, según su declaración testimonial, percibía hasta julio de 2019 su remuneración mediante acreditación bancaria pero una vez iniciado el concurso preventivo (05/07/2019), y al estar inhibidas las cuentas bancarias de Emilio Salvador Luque, con motivo del concurso preventivo iniciado, los pagos se continuaron efectuando en la cuenta sueldo a través de la empresa BIO ATAR SA. de la cual Luque es socio mayoritario. Dicho trabajador, según versión del organismo administrativo fue declarado con remuneraciones inferiores a las realmente percibidas durante el periodo 09/2019 a 12/2021. Notificado el empleador a fin que proceda a su rectificación, y transcurrido el plazo otorgado no se obtuvo respuesta de parte del titular, lo que fue notificado el 05/08/2022, determinación que fue impugnada por el titular de autos.

El artículo 2º de la ley 24.241 al referir las obligaciones del empleador establece que deben inscribirse como tal ante la autoridad de aplicación, dar cuenta de las bajas que se produzcan en el personal, practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal y depositarlos a la orden del SUSS, suministrar todo informe y exhibir los comprobantes justificativos que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobantes y compulsas que aquella ordene en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos. El mencionado artículo es una norma dirigida a proteger al trabajador al imponer al empleador en forma genérica, entre otras obligaciones la de suministrar toda la información que le requiera la autoridad de aplicación así como también permitir las investigaciones que ésta disponga en los lugares de trabajo y sobre los documentos de la empresa.

En el caso que nos ocupa adquieren importancia las pruebas producidas en las causas judiciales que se ventilan por ante la justicia ordinaria con competencia en materia laboral de San Miguel de Tucumán (expte 449/2022 “Mazziotti Luis Adrián c/Luque Emilio Salvador s/Cobro de pesos” y expte 106/2022 “Luque Emilio Salvador c/Mazziotti Luis Adrián s/Pago por consignación”) por lo que resultaría conveniente contar con un pronunciamiento judicial firme que determine si existieron o no pagos sobre los que no se habrían efectivizado los aportes y las contribuciones de seguridad social que exige el art. 12 de la ley 24.241 a través de sus incisos c) y d).

Ahora bien, la doctrina reiteradamente ha expresado que el derecho de ofrecer y producir prueba abarca el derecho de ofrecer la prueba de descargo de que quiere valerse el particular, que se produzca la misma en caso de ser pertinente, y que dicha producción sea efectuada





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

previamente a que se adopte alguna resolución sobre el fondo del asunto (ver Hutchinson “Régimen de Procedimientos Administrativos” editorial Astrea página 51).

En el caso de autos, el organismo declaró clausurada la etapa probatoria con fecha 16 de mayo de 2023 siendo notificada a la parte tal decisión el 22 de mayo de 2023.

Planteada así la cuestión y persistiendo dudas sobre los hechos denunciados se torna conveniente la realización de una nueva y profunda investigación a fin de arribar a la veracidad de lo acontecido.

En definitiva propongo: se deje sin efecto la resolución recurrida, devolviendo la causa a sede administrativa para que, previa realización de una nueva investigación y con el aporte de todo aquel elemento probatorio que la parte actora estime conveniente acompañar en defensa de sus derechos, dicte nueva resolución fundada sobre el tema en debate. El sentido de mi voto me lleva a propiciar que las costas sean impuestas en el orden causado (art. 68 2do párrafo CPCCN). Así lo voto.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero a la propuesta de mi distinguido colega de Sala.

Por todo lo expresado el Tribunal **RESUELVE: 1º)** Dejar sin efecto la resolución recurrida, **2º)** Devolver la causa a la instancia administrativa a fin que, previa realización de una nueva investigación y con el aporte de todo aquel elemento probatorio que la parte actora estime conveniente acompañar en defensa de sus derechos, dicte nueva resolución fundada sobre el tema en debate, **3º)** Imponer las costas en el orden causado (art. 68 2do párrafo CPCCN). Regístrese, notifíquese, publíquese y cumplido lo anterior remítase.

El Doctor Juan Fantini Albarenque no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO
Prosecretario de Cámara

ALP.

